

Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

Por sentencia de catorce de diciembre del año dos mil veintidós, dictada por la jueza Ema Novoa Mateos del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT M-2395-2022, sustanciados bajo las reglas del procedimiento monitorio, iniciado por demanda sobre despido improcedente y cobro de prestaciones, interpuesta por Lorena del Carmen Bustamante Llantén en contra de Clínica Dávila Servicios Médicos SpA, se acogió la demanda declarando que el despido de la trabajadora de fecha 29 de julio del año 2022 es injustificado e improcedente y, en consecuencia, la demandada fue condenada a pagar a la actora el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía y, a su vez, a las costas de la causa que se fijaron en la suma de \$500.000.-

Contra ese fallo, recurrió de nulidad la parte demandada interponiendo dos causales de forma subsidiaria. En primer lugar, se refiere a la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción de ley en relación con el artículo 13 de la Ley N° 19.728, en la parte que acogió la acción de restitución del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía y, a su vez, con lo dispuesto en los artículos 19, 22 y 23 del Código Civil. En segundo lugar, alega la misma causal de nulidad, esta vez, en relación con la condena en costas alegando la infracción del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y, asimismo, de los artículos 445 y 459 N° 7, ambos del Código del Trabajo. Solicita que se invalide el fallo respecto del cual se recurre y, acto continuo, se dicte sentencia de reemplazo rechazando la denuncia en todas sus partes. Asimismo, en el petitorio del recurso el recurrente diferencia entre la causal principal y aquella subsidiaria.



Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día dieciséis de noviembre último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte demandada funda su recurso en dos causales de nulidad, las cuales interpone de forma subsidiaria. En primer lugar, adujo la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo en la hipótesis de infracción de ley en relación con el artículo 13 de la Ley N° 19.728 el cual analiza a la luz de los artículos 19, 22 y 23 del Código Civil. En segundo lugar, opuso la misma causal sobre infracción de ley respecto de artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 445 y 459 N° 7, ambos del Código del Trabajo.

En cuanto a la causal de nulidad por infracción de ley respecto del artículo 13 de la Ley N° 19.728

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente, la sentencia incurre en error de derecho al desestimar la procedencia del descuento del aporte al seguro de cesantía y, por consiguiente, condenar a su representada a la restitución de aquel. En efecto, explica que la sentenciadora desestima dicha alegación sosteniendo simplemente que el despido es injustificado, alejándose del texto del referido artículo 13 de la Ley N° 19.728, el que no ha establecido como requisito la justificación o injustificación de la causal de despido, sino solo la existencia o no de una indemnización por años de servicio.

Luego, en tal orden de ideas, alega que si se hubiese aplicado correctamente el artículo 13, ya mencionado, no se habría acogido la solicitud de restitución del aporte del empleador al seguro de cesantía puesto que no es un requisito para proceder a este descuento que el despido practicado al demandante sea justificado o no, sino sólo la concurrencia de la indemnización por años de servicios a favor del



trabajador, toda vez que la imputación de tal artículo no depende de la calificación del despido. Por ello, en su parecer, de la sola lectura de la disposición legal se desprende que la imputación procede cuando el dependiente sea despedido por alguna de las causales contempladas en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Asimismo, agrega que en la norma que estima infringida no se establece condición alguna para la procedencia de la imputación relativa a que el despido no deba ser declarado como improcedente. De esta manera, al negare el derecho a la imputación se está incorporando una condición no contemplada en el texto de la norma, con infracción a las reglas de interpretación de la ley contempladas en el Código Civil.

Así las cosas, esgrime que el tenor de la disposición legal es claro, de manera que no cabe desatenderlo conforme lo previene el artículo 19 del Código Civil. De igual manera, refiere que, de conformidad al artículo 23 del mismo código, no cabe al intérprete extender el sentido de la norma, incluyéndose en ella una condición de que el despido no sea considerado como injustificado, pues lo odioso que le pueda parecer no puede tomarse en cuenta para extender su real sentido.

Por su parte, arguye que en el caso que el despido sea declarado como improcedente se encuentra expresamente regulado en el artículo 52 de la Ley N° 19.728, el cual regula qué sucede con el derecho de imputación del empleador en caso de que el trabajador no se conforme con la causal de necesidades de la empresa y el tribunal acogiere la acción de despido improcedente. En tal caso, el tribunal deberá ordenar el pago de las prestaciones que corresponden, esto es, la indemnización por años de servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo cual implica que la correcta interpretación de la norma -sin restringir o extender su real significado-, es que el tribunal deberá ordenar el pago de la indemnización por años de servicio, con derecho a



imputación, en caso de que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales del artículo 161 del Código del Trabajo. Confirma esta conclusión, a su juicio, una interpretación sistemática de la norma, pues, de entenderse que no procede el derecho de imputación en caso de que se esté ante un despido improcedente, no tendrían aplicación las restantes disposiciones de esa norma, que regulan con precisión cómo debe hacerse efectivo el derecho de imputación del artículo 13 en esos casos.

Así, agrega que, tal como ordena el artículo 22 del Código Civil, para que exista una debida coherencia y armonía entre lo dispuesto en todos los incisos del artículo 52, en relación con el artículo 13, ambos ya citados, debe necesariamente llegarse a la conclusión que es procedente la imputación del empleador cuando el despido por necesidades de la empresa es declarado por el tribunal como improcedente.

En otro orden de ideas, refiere que siguiendo el mandato de interpretar de forma armónica el cuerpo normativo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.728, el cual, en su parecer, confirma lo que ha expuesto, en cuanto indica que los derechos establecidos en esa ley son independientes y compatibles con los establecidos para los trabajadores en el Título V, del Libro I del Código del Trabajo.

A su vez, alude al artículo 168 del Código del Trabajo en cuanto a que ya prevé una sanción respecto del despido improcedente, a saber, el recargo de la indemnización legal. El despido por necesidades de la empresa que es declarado por el juez como improcedente sigue siendo un despido por necesidades de la empresa. Luego, a su juicio, el efecto que se produce no es la mutación de la causal de despido, sino, más bien, el recargo de la indemnización por años de servicio a que tiene derecho el trabajador.



Así las cosas, en otro ítem, se refiere a que el aporte del empleador a la cuenta individual del seguro de cesantía tiene la naturaleza de indemnización por años de servicio. Explica que el artículo 54 de la Ley N° 19.728 dispone que los aportes del empleador a favor del trabajador tienen la calidad jurídica de una indemnización por años de servicio, para todos los efectos legales. De esta manera, de no proceder la imputación a que hace referencia el artículo 13 de la ley, ya aludida, cuando el despido por necesidades de la empresa es declarado como improcedente, se estaría otorgando una doble indemnización por años de servicio al trabajador, por un monto equivalente al del aporte. Lo anterior, en su parecer, constituiría una nueva sanción para el empleador en caso de despido injustificado no contemplada en la legislación, la cual no está contemplada expresamente en el texto de la norma y, además, se trataría de un enriquecimiento sin causa para el trabajador, pues se le estaría otorgando una doble indemnización en base a un mismo fundamento.

Para apoyar sus dichos, alude a diversos fallos de unificación de la Excma. Corte Suprema, los cuales cita y, a su vez a doctrina sobre la materia.

Por último, arguye que el vicio de nulidad ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que su comisión implica una resolución contraria a la conclusión a que ha arribado el juez del grado para ordenar el pago de lo descontado por el empleador por aporte al seguro de cesantía. En efecto, de haber aplicado de forma correcta la legislación pertinente, en especial, los artículos 13, 52 y 54 de la Ley N° 19.728, en relación con el artículo 168 del Código del Trabajo, se habría llegado a la conclusión que era procedente que el empleador hiciera el descuento de lo aportado a la cuenta individual del seguro de cesantía, más su rentabilidad, siendo lo anterior indiferente a la calificación del despido y, por consiguiente, hubiera rechazando la



demanda en la parte que se solicita la restitución del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

CUARTO: Que, el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

Por su parte, el artículo 52 de la citada ley establece que: *“Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios”*.

Y agrega en el inciso 2° que: *“Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”*.

Luego, el artículo 54 del mismo cuerpo legal establece que: *“Las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales,*



y gozarán del privilegio establecido en el N° 8° del artículo 2472 del Código Civil”.

Finalmente, el artículo 168 del Código del Trabajo, establece en su inciso penúltimo, que: *“Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores”.*

QUINTO: Que, del tenor de las disposiciones antes transcritas, se desprende que, para que el descuento opere, es necesario que el saldo que se registra en la cuenta individual del trabajador, por concepto de seguro de cesantía, se haya producido el término de los servicios del trabajador por la causal de necesidades de la empresa.

Por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de este es injustificado, improcedente o indebido -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del artículo 13 precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.



Pensar lo contrario, implicaría que al empleador le basta invocar esta causal para que se aplique el descuento, olvidando que esa determinación puede ser objeto de revisión por la justicia, a requerimiento del trabajador, quien acciona motivado por lo que estima una vulneración de sus derechos, los que son irrenunciables.

Este predicamento, por lo demás, se refuerza en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley N° 19.728, antes aludido, toda vez que al acogerse la demanda del trabajador, declarando el despido improcedente, dicha disposición establece que el tribunal *“deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que corresponden conforme al artículo 13”*, referencia que debe entenderse hecha al inciso primero de este último precepto, pues el pretendido descuento obviamente no es el pago de las prestaciones, sino una disminución de las mismas.

SEXTO: Que, por último, admitir la tesis del recurrente significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado, indebido o improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente al trabajador.

En suma, por lo ya expuesto, la interpretación que ha dado la sentencia a las normas denunciadas es la correcta, por lo que no se configura la infracción de ley esgrimida por la demandada, lo que conlleva al rechazo del recurso.

En cuanto a la causal de nulidad por infracción de ley respecto del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 445 y 459 N° 7, ambos del Código del Trabajo



SÉPTIMO: Que, habiéndose rechazado la causal principal, corresponde analizar la subsidiaria relacionada con la condena en costas.

En primer término el recurrente se refiere a su pertinencia. En su parecer, conforme a la sentencia de 19 de octubre de 2012 dictada en la causa Rol N° 107-2012 por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, su alegación resulta atinente al recurso de nulidad.

Ahora bien, respecto del fondo de sus argumentos alega que su representada ha sido condenada en costas efectuando una interpretación errónea del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 445 y 459 N° 7, ambos del Código del Trabajo y de la institución de las costas, puesto que, a pesar de haber sido completamente vencida, tuvo motivo plausible para litigar y demostró una conducta de acorde a la buena fe procesal, aceptando las bases de acuerdo propuesta por la sentenciadora, siendo esta rechazada por la actora. En tal contexto, explica que la declaración de condena en costas busca sancionar al litigante por un actuar dilatorio, manifiestamente inescrupuloso o de mala fe, lo cual, en su parecer, no ocurrió en este caso.

Por otro lado, dada la cuantía total del juicio, resulta desproporcionada la condena en costas aplicada, \$ 500.000, pues prácticamente corresponde al 25% del total de la condena. Por lo tanto, no se han seguido los criterios de justicia y equidad que la jurisprudencia ha requerido en estos casos.

De este modo, esgrime que si se hubiese interpretado correctamente las normas que estima infringidas, se habría concluido que no procedía la condena en costas a su representada.

OCTAVO: Que el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil dispone en su primer inciso que "la parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas" Agrega el mencionado inciso que "Podrá con todo el Tribunal eximirla de ellas,



cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará una declaración expresa en la resolución".

Por su parte, el artículo 459 N° 7 del Código del Trabajo refiriéndose a los contenidos de la sentencia definitiva indica: "7.- El pronunciamiento sobre el pago de las costas y, en su caso, los motivos que tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte vencida".

De lo expuesto se concluye que el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable en materia laboral, comoquiera que la regulación de costas se encuentra expresamente normada, como se dijo, en el numeral 7° del artículo 459 precitado, disposición que impone al sentenciador si resuelve absolver del pago de las costas, independientemente si la parte ha sido vencida total o parcialmente en el juicio, hacer declaración expresa de los motivos que tuviese para ello, lo que no ocurrió en la especie.

Además, es menester recordar que la viabilidad de un recurso como el de la especie requiere que la infracción de ley influya en lo dispositivo del fallo, cuestión que no resulta aplicable al pronunciamiento que se realiza sobre las costas de la causa, pues como ha reiterado uniformemente la doctrina, esta sanción no comparte la naturaleza de sentencia definitiva, pues se trata de una medida de orden económico que no forma parte del asunto controvertido.

Por ello, solo cabe concluir que la decisión relativa a las costas no puede tener influencia en lo dispositivo del fallo, exigencia que por definición reclama el recurso nulidad para que se justifique la invalidación de una sentencia.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado, el recurso de nulidad será desestimado.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad



deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de catorce de diciembre del año dos mil veintidós, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT M-2395-2022, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma el abogado integrante señor Hamel, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Laboral-Cobranza N° 59-2023.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Carolina S. Brengi Z., Alejandro Aguilar B. Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>